

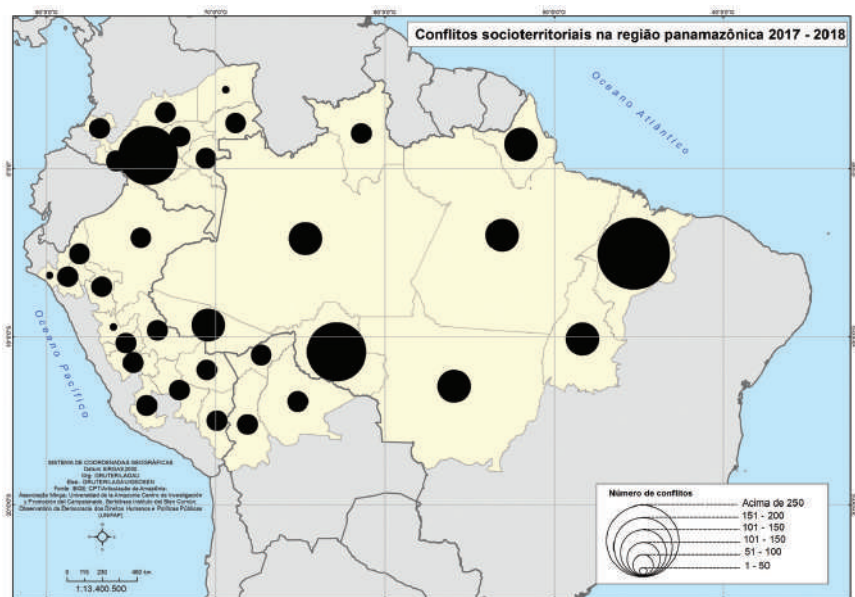
Construcción de un Atlas Panamazónico de Conflictos

La región panamazónica abarca millones de personas y centenas de pueblos, que viven su identidad a partir de su relación con el agua y con la madre tierra, elementos fundamentales de su sobrevivencia y existencia. Estos pueblos, a pesar de tener reconocido su derecho a la vida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en realidad están gravemente amenazados por ataques del capitalismo en tres frentes: la violencia institucional, jurídica e económica. Estos ataques amenazan no apenas la naturaleza con una biodiversidad única en el Planeta, sino también a todos los pueblos que desde siglos habitan estos territorios.

En el 8º Fórum Social Panamazónico (FOSPA) de 2017, realizado en Tarapoto, en el Perú, fue divulgado o primer Atlas de Conflictos de la Amazonía brasileña, elaborado por la Comisión Pastoral de la Tierra – Articulación de las CPTs de la Amazonía. Se constata que la situación de conflictividad es común a todos los países amazónicos. De este Fórum salió entonces la iniciativa de crear un Atlas de la Panamazonía en su conjunto, reuniendo esfuerzos de 8 organizaciones de 4 países. El objetivo es presentarlo durante el 9º FOSPA, de 22 a 25 de marzo de 2020, en Mocoa (Putumayo, Colombia).

Adelantando lo que será el Atlas de Conflictos Pan-Amazónico, a partir de datos de 2017 y 2018, presentamos un panorama sobre conflictos activos en Bolivia, Brasil, Colombia y Perú.

Estos datos revelan los conflictos del campo, las violencias contra los pueblos y comunidades y el impacto de la deforestación. En la Amazonía hay un nuevo escenario de disputa internacional, donde todos los días centenas de conflictos afectan directa e indirectamente miles de pueblos tradicionales que dependen de los bosques para sobrevivir.

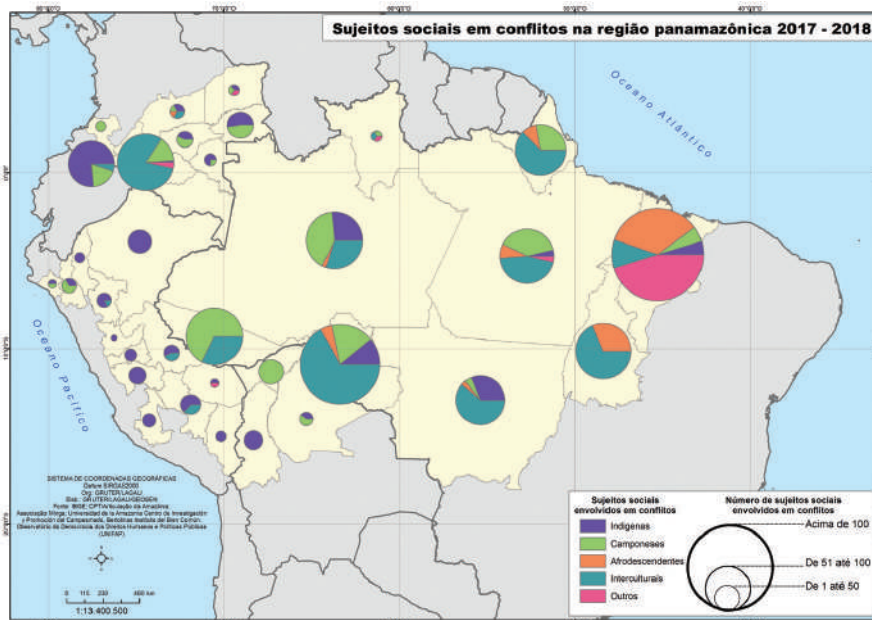


Conflictos, violencia e incendios en la Amazonia

Los pueblos afectados

La lucha y resistencia de los pueblos originarios, sean indígenas, afrodescendientes, campesinos, caucheros, pescadores y otras tantas identidades diseminadas por toda la Amazonía, han sido la principal herramienta contra los ataques a la naturaleza y a los territorios del bioma amazónico.

Tan solo en la cuenca amazónica del Perú existen más de 51 pueblos indígenas, que albergan aproximadamente 2500 comunidades nativas, 4000 mil comunidades campesinas, 11 reservas indígenas/territoriales para cerca de 15 pueblos en aislamiento o contacto inicial y 60 áreas naturales protegidas, donde existen 73 millones de hectáreas de bosques tropicales.



Esta gran diversidad cultural y la riqueza de bienes naturales del territorio amazónico está amenazadas por la codicia del capital que, a través de la ola neoextractivista, avanza con violencia en la región. O sea a través de las concesiones mineras, petroleras, forestales y de los proyectos de infraestructura, que atienden el llamado de los estados para viabilizar la logística necesaria para la usurpación de la naturaleza.

El resultado de todo ello es la explotación de los bienes naturales, la deforestación en larga

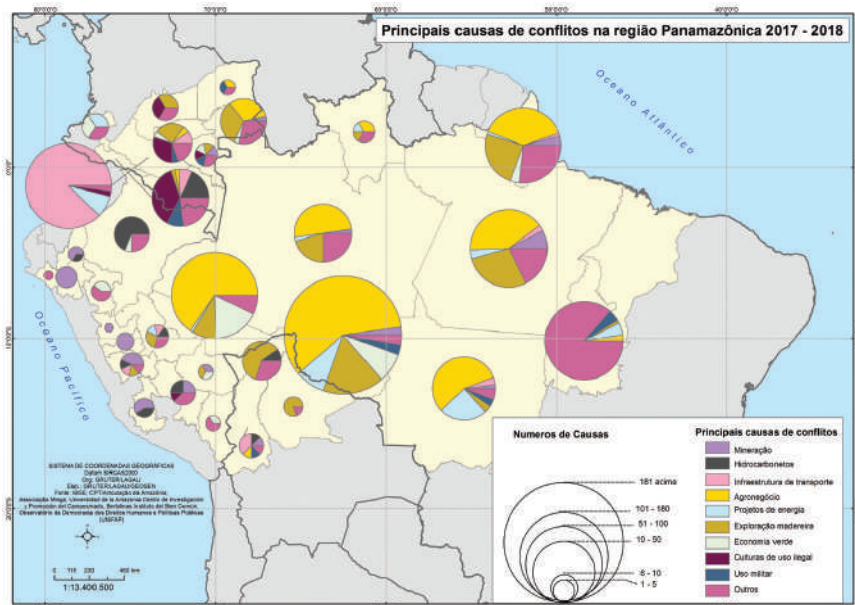
escala y el ataque directo a los pueblos que resisten a este modelo. Entre 2017 e 2018 hubo en el Perú cerca de 10 asesinatos de líderes indígenas y campesinos. En la Amazonía brasileira, en este año de 2019 el número de asesinatos ya asciende a 14 personas.

Principales causas de los conflictos

En la Amazonía colombiana la mercantilización de la naturaleza también es una realidad dura, en la cual el propio gobierno implementa acciones de extractivismo, como la exploración minero-energética. A pesar de la sentencia 4.360/2018, por la cual se reconoce a la Amazonía colombiana como sujeto de derechos y que impone al Estado las obligaciones de protección, conservación y restauración, lo que se observa es el aumento de los conflictos socioambientales, provocados por el acaparamiento de tierras y la expansión de economías extractivas legales e ilegales.

El gobierno colombiano autorizó los procesos de explotación de petróleo asignados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y por la Agencia de Licencias Ambientales (ANLA) legitimando el avance sobre las riquezas naturales. Además de estos emprendimientos y de los daños provocados por el material de arrastre y por el depósito de metales en los cauces de los ríos por las actividades mineras, están en curso en Colombia proyectos hidroeléctricos que debilitan el tejido social, provocan efectos irreversibles en el territorio y violencia contra líderes.

La Amazonía Colombiana es uno de los territorios más golpeados por el conflicto armado y por la violencia paramilitar. La disputa por el suelo y por el subsuelo va de la mano de la ilegalidad y de la corrupción; y trae con ellas una nueva fase de violencia, con la presencia de grupos armados, delincuencia organizada y militarización, en una sociedad que busca y apuesta por la paz.



Violencia contra las personas y los territorios

Junto con la deforestación y los incendios, en la Amazonía ocurren igualmente los peores ataques contra la vida. Innúmeras masacres y asesinatos, con requintes de todo tipo de crueldad, victiman líderes, militantes, pueblos y comunidades tradicionales, religiosos y tantas otras personas. En Brasil, hay un triste histórico de violencia en el campo. Sólo en 2017, fueron asesinados 71 personas en conflictos rurales. El gobierno brasileño, en vez de asumir la responsabilidad de garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, actúa con un discurso a favor de aquellos que cometen los más diferentes crímenes en la Amazonía.

La elección del actual presidente de la República de Brasil, a finales de 2018, y su discurso agresivo e conservador, sonaron como un aval a las prácticas de acaparamiento de tierras públicas por latifundistas y madereros, y a los ataques a los territorios ocupados por los pueblos amazónicos. Asesinatos de líderes defensores de la naturaleza y de los territorios, desalojos de campesinos, expulsiones de indígenas, ataques a afrodescendientes, deforestación incluso en Reservas ambientales pasaron a ser practicados con una frecuencia y una violencia nunca imaginada.



Incendios y devastación de las florestas

En la actualidad, Bolivia vive un momento en el que las políticas para el sector agropecuario vienen generando efectos adversos para sistemas ecológicos y de vida, principalmente en la Chiquitanía y en la Amazonía boliviana. La consolidación de las propuestas neoextractivistas y la ampliación de la frontera agropecuaria se dan a través de cambios en el uso del suelo, a través de los famosos Planes de Uso de Suelo (PLUS) y por leyes et decretos supremos. La promulgación del Decreto Supremo (DS) 3973 modificando el artículo 5 del DS 26075 del 9 de julio del 2019 sobre tierras de producción forestal permanente, autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias de dos departamentos amazónicos: Santa Cruz y Beni.

Otras leyes que fomentan la ampliación de la frontera agropecuaria (337/13, 502/14 y 739/15) establecieron la amnistía a la deforestación ilegal y ampliaron plazos para subsanar el delito. En 2015 se aprobó la ley 740, que permite ampliar de 2 a 4 años la verificación de la función social de la tierra, y en septiembre la ley 741 que autoriza los desmontes libres de hasta 20 hectáreas en pequeñas propiedades (antes no debían sobrepasar las 5 hectáreas), en tierras comunitarias o colectivas en procesos de saneamiento o tituladas y en asentamientos legales.

Como resultado de esas políticas, tan solo entre los días 10 al 31 de julio de 2019, 4.270 focos fueron detectados a través de los satélites Aqua MODIS y Terra MODIS de la NASA, y otros 26.731 entre el 1° y el 31 de agosto. Hasta el mes de septiembre, en toda Bolivia, las áreas quemadas ascienden a 5,1 millones de hectáreas según SATRIFO-FAN, una grande parte em bosques amazónicos. Igualmente en Brasil, una acción coordinada de incendios em agosto de 2019, aprovechó el período de sequía para convertir la floresta amazónica en cenizas.

En 2018, según datos de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), más del 95% de las áreas en disputa del Brasil se sitúan en la Amazonía legal. Las leyes que facilitan la compra de tierras por los extranjeros y las contradictorias leyes de regularización de tierras favorecen las invasiones y el acaparamiento de tierras; la desestructuración de los organismos de monitoreo y protección ambiental; la ruptura de acuerdos internacionales, además de los decretos para armar los hacendados contra los trabajadores, con ataques sistemáticos a los pueblos y comunidades, movimientos y organizaciones populares, buscando instalar miedo y terror entre los grupos sociales amazónicos, atacando igualmente otros sectores de la sociedad.

El Sínodo como un soplo de esperanza: unidos y unidas por el planeta, unidos y unidas por la Amazonia

Hacemos un llamado a las comunidades de la Amazonía boliviana, brasileña, colombiana y peruana, y a los pueblos de los diferentes países del planeta, en comunión con la Iglesia Católica y demás iglesias, junto a los obispos y al Papa Francisco, reunidos en el Sínodo sobre la Amazonía, para refirmar nuestra lucha y resistencia contra todas las formas de destrucción de nuestras culturas y de nuestros pueblos, así como de nuestra principal fuente de vida, los ríos y los bosques amazónicos. Es necesario y urgente la construcción de nuevos caminos para garantizar la vida en la floresta amazónica. No se puede continuar permitiendo que un sistema destructivo y violento ponga aún más en riesgo la existencia de un bioma determinante para la vida en la tierra.



Mapas: Grupo de Extensão e Pesquisa sobre Terra e Território da Amazônia/UNIFAP

Redacción: Gilson Rego, Maria José dos Santos, Darlene Braga, Josep Iborra, Luis Hallazi, Olga Lucía Suárez, Mercedes Mejía, Patrícia Rocha, Doris Dominguez, Carmelo Peralta

Edición: Sector de Comunicación de la Secretaría Nacional de la CPT

Organización:



Apoyo:

